



Hacia una “normalidad” luctuosa

(Mathieu Tourliere, pág. 6-9)

Este lunes 1 de junio México entra en la “nueva normalidad” mientras la curva de casos de covid-19 sigue en pleno ascenso e incluso en aceleración, coinciden proyecciones matemáticas basadas en inteligencia artificial, tendencias en los reportes oficiales y declaraciones de las autoridades federales de salud.

En el mapa de los “semáforos de riesgo”, diseñados para guiar a los gobiernos estatales en sus políticas de reapertura económica, aparece un México de color rojo vivo –que se refiere a un “riesgo extremo” de contagio–, excepto el estado de Zacatecas. El subsecretario Hugo López-Gatell insistió la mañana del viernes 29 que la epidemia “sigue”, que “no ha concluido” y que le faltan “todavía varias semanas (...) todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país”.

Este lunes habrá aproximadamente 964 mil 995 personas portadoras activas del virus en el país, 240 mil casos más que una semana antes, de acuerdo con un modelo matemático basado en inteligencia artificial que desarrolló Youyang Gu, científico de datos egresado del Tecnológico de Massachusetts, cuyo modelo es usado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y ha tenido un margen de error inferior a 10% respecto de las cifras confirmadas en el país vecino.

La base de datos del científico estima que el pico de la epidemia se producirá el 25 de julio en México, con 3 millones 487 mil portadores activos, mientras que el pico de muertes ocurriría el 6 de agosto, con una estimación de mil 934 fallecimientos. A principios de septiembre, según el mismo modelo, la enfermedad habría cobrado la vida de 131 mil 285 personas en el país, equivalente a una muerte por cada mil habitantes. Ello colocaría a México como el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo.

Este modelo estima las infecciones totales en los países y no solamente las personas que salieron positivas en pruebas de covid-19, pues según el científico de datos, “la gran mayoría de los individuos no se hace prueba, y por lo tanto no se reporta como caso positivo”. Sostiene por ejemplo que en Estados Unidos el número real de personas infectadas es cinco veces mayor al reportado, mientras que en México es 25 veces mayor a los informes oficiales; hasta la fecha –según ese modelo– alrededor de 2 millones 313 mil mexicanos se han infectado.



Otro estudio, publicado el pasado lunes 25 por el Instituto de Física de la UNAM, estima que el pico de la pandemia a escala nacional ocurriría entre el 27 de junio y el 13 de julio; proyectó que las cifras oficiales cerrarán el primer ciclo de la epidemia con 126 mil casos confirmados, con lo que a finales de mayo 1% de los mexicanos tendría inmunidad ante el virus, “lo cual no permitirá la práctica de ‘inmunidad de rebaño’”, precisó su autor, Octavio Miramontes.

Más allá de las polémicas sobre la precisión de las cifras oficiales –López-Gatell ya aclaró que no se busca la exhaustividad, sino identificar tendencias–, éstas también indican que la epidemia sigue avanzando: la mañana del viernes 29 se señalaba que en México existían 16 mil 315 casos vigentes de personas con covid-19, el registro máximo desde el principio de la pandemia, con 723 casos más que el día anterior y 4 mil 230 más que una semana antes. En otras palabras: había más portadores activos que nunca antes en el país.

Aparte, la cifra de fallecimientos alcanzaba 9 mil 44 casos y la de casos confirmados desde el inicio de la pandemia era superior a 81 mil 400, con aumentos respectivos de mil 411 y 10 mil 295 casos en comparación con tres días antes.

Reapertura económica bajo riesgo

(Miguel Silerio, pág. 10-13)

Ciudad Juárez, Chih.– Entre presiones de cámaras empresariales, manifestaciones y pérdida de empleos, Chihuahua camina rumbo a la reanudación de actividades de las industrias automotriz, aeroespacial, minera y de la construcción, consideradas esenciales en los lineamientos federales para el retorno a la llamada “nueva normalidad”, publicados el jueves 14.

Aunque el discurso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sigue dándole prioridad a la salud de los trabajadores, no ha hablado de las empresas que continúan sus operaciones sin atender las indicaciones federales, y la Secretaría de Salud estatal ha invisibilizado la cifra de contagios de covid-19 entre los 300 mil empleados de maquiladoras en Ciudad Juárez.

La última actualización de ese dato es del pasado 29 de abril, cuando el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, confirmó la muerte por coronavirus de 17 operadores de esa industria, aunque otros empleados de la misma señalan que la cifra real es mucho más alta.

Durante este mes Corral Jurado ha sostenido reuniones con representantes de las cámaras de los sectores productivos de Chihuahua, las cuales advierten de serias afectaciones económicas en caso de que las actividades industriales y comerciales sigan paralizadas.



El miércoles 20, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Juárez, Jesús Manuel Salayandía Lara, pidió no “satanizar” a las maquiladoras y advirtió que las autoridades “atrasaron la reapertura hasta el 1 de junio y de nuevo lo van a atrasar porque tienen miedo; y entre más lo alarguen se va a complicar más el problema económico”.

También negó que haya brotes de covid-19 en las plantas productivas y trató de justificar la proporción de contagios confirmados en la industria de la transformación: “En un pueblo de pescadores, que su principal actividad económica es la pesca, los principales contagiados van a ser pescadores. Si te vas a un pueblo que es minero, los mineros van a ser los contagiados. Aquí, la industria de transformación es la principal”.

El mismo día, el coordinador ejecutivo del gabinete estatal, Jesús Mesta Fitzmaurice, informó que la contingencia sanitaria ya ocasionó la pérdida de 18 mil 19 empleos en Chihuahua entre marzo y abril, de los cuales 5 mil 564 corresponden a Ciudad Juárez.

El funcionario detalló que la mayor parte corresponden a la industria de la transformación, con 5 mil 500 empleos perdidos, seguida por la prestación de servicios (3 mil 985) y la construcción (2 mil 803).

El llamado del presidente de la Canacintra local se suma a los de la Industria Nacional de Autopartes, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, que buscan reanudar las actividades en los estados de Chihuahua y Puebla.

A través de sendas cartas dirigidas a los gobernadores de esos estados, los representantes de las asociaciones advirtieron que de no reiniciar la operación de las plantas aumentarán el desempleo, la pérdida de confianza y la falta de competitividad.

Las presiones para reabrir la industria automotriz se intensificaron con la dilación en la reapertura de las plantas en México, la cual se esperaba para el lunes 18, a la par de la reapertura gradual de las grandes empresas estadounidenses como General Motors, Ford y Fiat Chrysler.

En cambio, el acuerdo para el regreso gradual de las actividades sociales, educativas y económicas en todo el país interrumpió los preparativos para la reapertura industrial con el anuncio de un sistema de semaforización que, aun después del 1 de julio, no permitiría la reactivación total de las industrias.



Sube la violencia contra las mujeres... bajan los recursos para protegerlas

(Gloria Leticia Díaz, pág.20-22)

Desde Sihó, una pequeña comunidad maya del municipio de Halachó, en la frontera entre Campeche y Yucatán, Nelsy Ku Chay disiente del discurso presidencial sobre la supuesta “fraternidad” y el reencuentro familiar durante el confinamiento domiciliario para evitar la propagación del coronavirus.

“Desconocemos qué es lo que conlleva la palabra fraternidad, la palabra armonía familiar de la que habla el presidente”, dice esta defensora comunitaria que es coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente, que agrupa 35 espacios en el país conocidos como camis, que apoyan de manera multidisciplinaria a las mujeres, particularmente a las que padecen violencia.

Encargada de la cami de su comunidad, llamada “Tooj óolal Puks’ik’aal”, que en maya significa “Sanando el corazón”, dedicada a la atención de la salud integral y prevención de la violencia, Nelsy Ku sostiene que, contrario a la imagen pacifista de los pueblos originarios, entre 80 y 90% de las familias indígenas jóvenes viven la violencia de manera cotidiana, situación que se ha agravado durante la cuarentena sanitaria.

“Fraternidad es lo que queremos, pero todavía sigue siendo algo imaginario, no es lo que estamos viviendo”, insiste la defensora de 44 años, la mitad de ellos dedicados al trabajo comunitario.

Advierte que en las zonas indígenas de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Veracruz y Chiapas se ha reportado un aumento de la violencia contra las mujeres durante estos dos últimos meses, situación que se padece, incluso, en Yucatán, donde fueron denunciados tres feminicidios en abril, cifra muy elevada para ese estado que habitualmente tiene bajos índices de violencia.

A Nelsy le resulta incomprensible que en este contexto de emergencia –y más adverso para las mujeres– el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decida fortalecer los recursos contra la crisis sanitaria cancelando la entrega de presupuesto a las camis, que el año pasado fueron de 30 millones de pesos para atender a unas 29 mil indígenas.

Las camis reciben financiamiento del Programa de Derechos Indígenas, dependiente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a dicho programa se le asignaron 199.75 millones de pesos, mientras el año pasado fueron 310.7 millones.



“Por primera vez en 17 años las camis tienen un recorte presupuestal. En el fondo, a las indígenas se les está negando el derecho a tener un acompañamiento para acercarse a instancias de gobierno, porque cuando van al Ministerio Público a denunciar violencia intrafamiliar, les dicen: ‘Pues no atendiste a tu marido o qué le hiciste... Tienes que atenderlo’. A veces estas mujeres no tienen dinero para ir a Mérida o a Umán a denunciar, y es cuando nosotras las apoyamos”.

Ku Chay advierte que a causa del recorte, algunas camis están por cerrar. “La cancelación de los fondos refleja que no estamos siendo consideradas como un sector esencial para la Cuarta Transformación, y esa es una forma de violencia, un atentado a nuestros derechos como mujeres indígenas”.

En espera de que López Obrador acuda a Cancún para dar el banderazo de salida a las obras del Tren Maya, Ku Chay expresa: “En la emergencia para enfrentar el covid-19, ¿en verdad la única bolsa que se requería como un asunto de vida o muerte para atender esta problemática era la de las camis?”

“Sorprende que para este gobierno la vida y la seguridad de las mujeres indígenas no sean esenciales, como sí lo son otros programas, como el Tren Maya, que siguen recibiendo recursos”.